



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA:	SENTENCIA - APELACIÓN
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA
DEMANDANTE:	LUZ DARY DE JESÚS URIBE Y GABRIEL ALONSO RICO VÁSQUEZ
DEMANDADOS:	COLFONDOS S.A
RADICADO:	0050013105-009-2016 – 00152 01
LLAMADA EN GARANTIA	MAPFRE SEGUROS DE VIDA S.A.
ACTA N°:	04

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por LUZ DARY DE JESÚS URIBE Y GABRIEL ALONSO RICO VÁSQUEZ para pronunciarse en virtud de los recursos de apelación interpuestos por COLFONDOS S.A. y MAPFRE SEGUROS DE VIDA S.A. respecto a la sentencia con la cual el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 04** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA¹

Los demandantes pretenden con este proceso se CONDENE a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo GABRIEL JAIME RICO URIBE a partir de la fecha del fallecimiento el 9 de octubre de 2012, intereses moratorios o subsidiariamente la indexación y costas del proceso.

Para sustentar sus pretensiones afirmaron, en síntesis: **i)** GABRIEL JAIME RICO URIBE falleció el **9 de octubre de 2012**, laboraba para Energizando y por la labor desempeñada tenía

¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01DemandayAnexos – páginas 5 a 17

una remuneración de \$800.000. Contaba con 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento. **ii)** Los padres solicitaron la pensión de sobrevivientes demostrando la dependencia económica, siendo visitados por un investigador quien plasmó una información errada lo que sirvió de fundamento para la negativa de la prestación. **iii)** Que no es cierto que Jenny Rico Uribe hermana del causante aportara mensualmente al sostenimiento del hogar o a sus padres, pues tiene dos hijos que para el momento de la muerte contaban con 5 y 6 años a quienes se dedicaba exclusivamente, no le quedaba tiempo para trabajar. El otro hermano David Steven es una persona enferma dependiente de las drogas ilícitas recluido en Bellavista y La Pola, no vivía con los padres por estar en estado de indigencia. La casa que se encuentra en Ciudad Bolívar genera un arriendo de \$200.000 que se destina al inmueble y en ninguna entrevista se afirmó que sirviera para el sostenimiento del grupo familiar. En ningún momento manifestaron que su hijo no tuviera deudas personales, era muy organizado y contribuía en los gastos de la casa con ayuda económica y alimentación que era con lo que más colaboraba al padre porque la madre era ama de casa. **iv)** Afirman que después de la muerte de su hijo quedaron afectados con inminencia y de manera grave su subsistencia.

1.2. LA CONTESTACIÓN DE COLFONDOS²

La entidad contestó oportunamente oponiéndose a las pretensiones y llamó en garantía a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. solicitando que en el evento en que se llegue a proferir condena en contra de la AFP para reconocer pensión de sobrevivientes, se condene a la aseguradora a reconocer y pagar la suma adicional en la cuantía que se requiera para completar el capital necesario financiar el pago de la pensión. Y que se le condene exclusivamente a las eventuales costas, intereses moratorios e indexaciones que lleguen a ser impuestos dentro del proceso.

1.3. LA INTERVENCIÓN DE MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS³

La aseguradora **se opuso a las pretensiones de la demanda** proponiendo como excepciones las que denominó FALTA DE LE GITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, INEXISTENCIA DEL DERECHO EN FAVOR DE LOS DEMANDANTES, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, FALTA DE TÍTULO Y CAUSA, INEXISTENCIA DE EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, INEXISTENCIA DE CAUSA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SANCIÓN POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LA PENSIÓN PRETENDIDA, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN y GENÉRICA.

² CARPETA PRIMERA INSTANCIA – archivo 03 ContestaciónYLLamamientoEnGarantia

³ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – archivo 04 ContestaciónYAudiencia

También presentó **oposición frente al llamamiento** proponiendo las siguientes excepciones de mérito: EVENTO NO AMPARADO, AUSENCIA DE RECLAMACIÓN, INEXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN Y AUSENCIA DE MORA, EXCEPCION DEL CONTRATO NO CUMPLIDO Y ASUENCIA DE MORA, PRESCRIPCIÓN, LIMITE DEL VALOR ASEGURADO, GENÉRICA.

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del **7 de septiembre de 2020**, el **Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín** tomó las siguientes decisiones: i) **DECLARÓ** que la señora LUZ DARY DE JESÚS URIBE URIBE y el señor GABRIEL ALONSO RICO VASQUEZ acreditan la condición de beneficiarios respecto de la pensión de sobrevivencia que dejara causado su hijo GABRIEL JAIME RICO URIBE como consecuencia de su fallecimiento el 9 de octubre del 2012, prestación económica que corresponde al SMLMV y que arroja la obligación de cancelar por concepto de retroactivo pensional entre la fecha referida y el mes de septiembre de 2020 la suma de \$73.538.847, y la obligación de que la AFP COLFONDOS S.A. a la cual se encontraba vinculado el demandante continúe reconociendo a partir del mes de octubre de 2020 por concepto de mesada pensional la suma de \$877.803, sin perjuicio de los reajustes de Ley; así mismo a reconocer **intereses moratorios** sobre dicho retroactivo pensional desde el **12 de febrero de 2013**. ii) **ORDENÓ** a la compañía **MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A** reconocer el capital suficiente para que entre a financiar la prestación económica reconocida a favor de los demandantes como consecuencia de la muerte del asegurado el señor GABRIEL JAIME RICO URIBE, conforme a lo señalado en el artículo 77 de la Ley 100 de 1993 y lo expuesto en la parte motiva. iii) **CONDENÓ** en costas a la AFP COLFONDOS S.A.

Para tomar estas determinaciones razonó de este modo: **i)** Para condenar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes efectuó una valoración del acervo probatorio en su conjunto a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo (Investigación realizada por MAPFRE y la demás prueba documental, los interrogatorios de parte y la prueba testimonial recaudada) para señalar que no hay ningún elemento de prueba que demuestre que los padres no acreditan la condición de beneficiarios, no encontró confesión en contra por parte de los padres y probados los presupuestos para declarar la existencia de la condición de beneficiarios. **ii)** Condenó a la AFP Y CESANTIAS COLFONDOS a reconocer la pensión desde el 12 de octubre de 2012 e invocó el Artículo 67 de la Ley 100 para condenar a MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. a reconocer la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. **iii)** No encontró demostrada la prescripción de mesada alguna porque la reclamación se efectuó el 11 de diciembre del 2012, fue resuelta el 15 de marzo del 2013 y el momento de la presentación de la demanda fue

el 27 de enero del 2016. **iv)** Condenó a COLFONDOS a intereses moratorios a partir del 12 de febrero del año 2013 invocando el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 701 de 2001 a partir de la reclamación del 11 de diciembre de 2012

3. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

3.1. EL RECURSO DE COLFONDOS⁴

La apoderada solicita la **REVOCATORIA** de la sentencia, planteando sus cuestionamientos básicamente: **i)** Respecto a la **prueba de la dependencia económica** cuestiona la valoración del acervo probatorio afirmando que los actores no acreditaron la calidad de beneficiarios de la prestación, señalando: No se tuvo en cuenta el tiempo que se dejó transcurrir entre el fallecimiento y la fecha en que se presentó la demanda, y que los padres están casados con sociedad conyugal vigente (Artículo 1781 del Código Civil). Que el demandante tiene un trabajo fijo formal que les permite obtener ingresos suficientes además del adicional que obtenían para la fecha de la muerte del afiliado proveniente de un inmueble en Ciudad Bolívar (Antioquia). Enfatiza en la valoración de la investigación que realizó MAPFRE COLOMBIA VIDA DE SEGUROS, que el documento no fue tachado. Insiste en la tacha propuesta sobre la testigo JHENNY asegurando que generan serias dudas y se presentan inconsistencias en la declaración del testigo SIMON. Y respecto al interrogatorio de los actores señala que debió valorarse conforme el Artículo 191 del Código General Del Proceso. Concluye que no basta con que los padres estuvieran recibiendo la ayuda económica de su hijo para tener derecho a la pensión de sobrevivencia, pues la mera presencia de un auxilio o una ayuda monetaria no siempre es indicativa de dependencia económica. **ii)** Aduce que **sí había lugar a declarar probada la prescripción** teniendo en cuenta que los demandantes radicaron su reclamación pensional en el año 2012 y la demanda fue presentada mucho más de tres años después (artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 151 del Código Procesal del Trabajo). **iii)** **Sobre los intereses de mora** indica que no podía imponerse a COLFONDOS porque está acreditado que elevó reclamo ante la llamada en garantía por el pago de la suma adicional para financiar la prestación y obtuvo una respuesta negativa; por lo que la decisión negativa no fue del resorte de COLFONDOS quien no podía disponer el pago de la pensión por la insuficiencia del capital. Agrega que en el evento remoto en que se confirme la condena deberán correr a partir de la ejecutoria de la providencia porque solo en ella se definió el derecho pensional. **iv)** **Controvierte la condena en costas** con los mismos argumentos que presenta para solicitar la absolución de intereses moratorios, para señalar que una condena en costas y agencias en derecho ha debido ser exclusivamente a cargo de

⁴ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – AUDIENCIA PÚBLICA **Min 40:41 – 1:07:34**

MAPFRE. Y si se llega a confirmar la sentencia en costas en contra de COLFONDOS habrá que imponerse también a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS por prosperar las pretensiones de COLFONDOS en su contra. **v)** Dice que al cuantificar el valor de la condena se desconoció que los demandantes deben asumir **el pago de los aportes al sistema general de salud. vi)** Y que a pesar que en la parte motiva se explicó cuál era la condena que procedía contra MAPFRE conforme con el artículo 70 de la Ley 100 del 93 no existe similitud con la que finalmente se impuso en la parte resolutive en el numeral segundo. Así precisa que **conforme el Artículo 77 de la Ley 100 del 93 debe ordenarse a la llamada en garantía pagar la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión**

3.2. LA APELACIÓN DE MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.⁵

El apoderado solicita la revocatoria de la sentencia planteando, en síntesis: **i)** En primer lugar cuestiona la valoración del acervo probatorio, haciendo énfasis en el trabajo de la firma investigadora que intervino en el trámite, el interrogatorio de parte y los testimonios; para señalar que se ha demostrado que los demandantes no tuvieron afectación sustancial de su condición de vida o situación económica. **ii)** Dice que se aparta de las consideraciones expuestas por la apoderada de COLFONDOS respecto al protagonismo de la llamada en garantía para la negativa de la prestación, así afirma que la AFP contaba con la autonomía para adoptar la decisión respecto a la procedencia o no de la prestación

4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia⁶, la demandada y la llamada en garantía intervinieron oportunamente así:

COLFONDOS insiste en la revocatoria de la sentencia desarrollando los siguientes aspectos⁷: **i)** Sobre el cubrimiento de contingencias en Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) invoca el artículo 46 y el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003 y el artículo 74 Modificado por el art. 13, Ley 797 de 2003 y la sentencia de la Sala de Casación Laboral con Radicado 35351 de fecha 21 de Abril de 2009). **ii)** En lo referente a **la prescripción** aduce que los demandantes radicaron solicitud pensional en fecha 11 de diciembre de 2012, aproximadamente seis (6) años después de la fecha desiniestro del afiliado fallecido (09 de octubre de 2012). **iii)** De las **costas y agencias en derecho** dice que en la sentencia se ignoró la

⁵ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – AUDIENCIA PÚBLICA Min 1:07:41 – 1:15:06

⁶ Artículo 15 Decreto 806 de 2020

⁷ CARPETA SEGUNDA INSTANCIA – archivo 06

responsabilidad de la llamada en garantía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS, pues se omitió el hecho de que mi COLFONDOS dio respuesta a los demandantes solo hasta que se realizara la investigación de la aseguradora con quien se tuvo contratado el seguro provisional para la fecha de causación. Insiste en que se omitió tener en cuenta que las administradoras de pensiones aprueban o no el reconocimiento de la pensión con base en la investigación proporcionada por la aseguradora. **iv)** Reitera que es la Compañía de Seguros con la cual se contrata el seguro de invalidez y sobrevivencia la encargada de **trasladar a la cuenta de ahorro individual de cada afiliado la suma adicional requerida para financiar una pensión de invalidez o de sobrevivencia, invocando los artículos 60 y 108 de la Ley 100 de 1993**, y que resulta claro que MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. recibió el pago de las primas de seguro por parte de COLFONDOS las cuales eran descontadas por disposición legal de los aportes pensionales efectuados a favor del demandante.

A su turno **MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.** reitera sus planteamientos, en los siguientes términos: i) En primer lugar plantea el **desacuerdo con la conclusión y análisis de la sentencia sobre la acreditación de la dependencia económica** de los demandantes y el análisis probatorio que permitió llegar a tal conclusión. Invoca de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sentencia del **12 de febrero de 2008, radicado 31346 reiterada en la SL2800-2014, y las SL988-2020, SL1759-2020, SL529-2020** para explicar que el debate no gira en torno a si el afiliado fallecido suministraba o no recursos, ni sobre la existencia de ingresos propios por parte de quien reclama la pensión, pues se debe centrar en determinar si los ingresos de quien pretende la pensión son suficientes para atender su sostenimiento y los recursos que recibía de quien fallece eran de tal magnitud que la ausencia de ellos afectan de manera determinante su condición de existencia. Así aduce: **a)** La prueba documental que acredita que los actores se encontraban afiliados como cotizante y beneficiaria del sistema de seguridad social integral con independencia del afiliado fallecido. **b)** La prueba documental que informa de la reducida historia laboral que evidencia lo discontinua y esporádica ocupación del afiliado fallecido que evidencian la imposibilidad de atender de manera sostenida sus propios gastos y los de sus padres. **c)** Las confesiones del Interrogatorio de parte sobre el destino que hacían de los ingresos, sobre la adquisición y sostenimiento de un inmueble con recursos propios, diferentes a cualquier apoyo que pudieran recibir de su hijo fallecido, sobre la exigua antigüedad de actividad laboral de su hijo fallecido, la ausencia de desmejora de sus condiciones de existencia por la muerte de su hijo GABRIEL JAIME RICO URIBE y la ausencia de penurias de salud que los obligaran a destinar sus ingresos o acudir a créditos para atender las necesidades de salud. **d)** Los testimonios de JHENNY RICO URIBE y SIMÓN ANGEL NARANJO. Lo anterior para decir que “El juicioso y mesurado examen del material probatorio, contrario a lo afirmado en la sentencia,

permite concluir sin asomo de duda, que la ayuda que los demandantes recibían del afiliado fallecido no resultaba vital ni sustancial ni relevante para el sostenimiento de los actores y que ellos contaban con recursos propios que les permitieron destinar sus ingresos a la atención de sus gastos, situación ésta que se conservó y mantuvo aún después del fallecimiento del afiliado GABRIEL JAIME RICO URIBE, y por tanto ninguna modificación sustancial de carácter económico se presentó que hubiere deteriorado las condiciones de existencia de los demandantes". ii) Sobre la **PRETENSIÓN DE COLFONDOS PARA QUE LA LLAMADA EN GARANTÍA SEA CONDENADA A PAGAR INTERESES MORATORIOS** invoca la sentencia **31214 del 21 de noviembre de 2007, y los artículos. 21 y 22 del Decreto 656 de 1994** para señalar que en este caso corresponde a COLOFONDOS asumir el reconocimiento de los intereses moratorios a que fue condenado, sin la posibilidad de repetir los mismos frente a MAPFRE como equivocadamente lo pretende quien formuló el llamamiento en garantía en este asunto.

Pues bien, la competencia de la Sala está dada por las materias de los recursos de apelación interpuestos por **COLFONDOS** y **MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**, por lo que el análisis en esta instancia se efectuará en el siguiente orden: i) Se verificará cuál es el alcance de la dependencia económica de padres a hijos exigida por el Ordenamiento Jurídico colombiano, para efectos de predicar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes. Y en el ANALISIS DEL CASO CONCRETO se determinará: si se acreditó en el proceso que los padres dependían económicamente del hijo para la época de su fallecimiento. ii) Se analizará si en este caso se acredita la prescripción de mesadas pensionales. iii) Y si resulta procedente la condena emitida a cargo de la llamada en garantía de MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. iv) Sobre la CONDENA a INTERESES MORATORIOS si se encuentra acreditada sólo a cargo de COLFONDOS y si resulta ajustada a derecho la condena en costas a cargo de la AFP.

5. EL ALCANCE DE DEPENDENCIA ECONÓMICA EXIGIDO EN LA LEY 797 DE 2003 EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DE LOS PADRES FRENTE AL HIJO FALLECIDO

Para el caso de los padres, cuando quién fallece es el hijo, se consagra lo siguiente en el artículo 13 de la Ley 797:

"d) A falta de cónyuge, **compañero o compañera permanente** e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este"⁸

En la Sentencia **C 111 de 2006**, la Corte fijó el alcance de la expresión dependencia económica, a la Luz de los postulados de la **Carta Política de 1991. De acuerdo con este**

⁸ **Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-111 de 2006**

importante precedente, para acreditarla no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o indigencia- sino que, por el contrario, **basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que le permita al beneficiario obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna.**

En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos: i) Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna. ii) El salario mínimo no es determinante de la independencia económica. iii) No constituye independencia económica recibir otra prestación. iv) La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional. v) Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes. vii) Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.

En el mismo sentido, se ha desarrollado la jurisprudencia nacional, señalando que el análisis en cada caso concreto debe orientarse a determinar el peso del aporte económico que efectuaba el hijo a sus progenitores para al momento de su fallecimiento, para verificar si ante su ausencia se afecta no solo el mínimo vital sino la congrua subsistencia de los padres. Así, la Corte Constitucional en sentencias como las **T-538 de 2015, T-725 de 2017, T-424 de 2018 y T 167 -2022**; y la Sala Laboral de la Corte Suprema en las **SL 11871 de 2017, del año 2019 SL 2605, SL 3772 -2019 y SL 3286, del año 2020 SL 2327, 2333, 5048 y la SL 4250 -2022**

Pues bien, descendiendo al CASO CONCRETO se advierte que el Juez de instancia concluyó que en este proceso se demostró la DEPENDENCIA ECONÓMICA de los padres frente al hijo GABRIEL JAIME RICO URIBE, decisión que fue recurrida por **COLFONDOS y MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.** cuestionando la valoración del acervo probatorio efectuada por el A quo.

En la demanda se afirmó que LUZ DARY y GABRIEL ALONSO dependían económicamente de su hijo quien para el momento del fallecimiento tenía una remuneración de \$800.000. y era pilar con su aporte para el sostenimiento de sus padres. Y cuestionan las conclusiones esbozadas en la comunicación con la que se negó la

prestación económica solicitada, negando que fuera cierto que Jenny Rico Uribe hermana del causante aportara mensualmente al sostenimiento del hogar o a sus padres. Y que el otro hermano David Steven es una persona enferma dependiente de las drogas ilícitas recluido en Bellavista y La Pola, no vivía con los padres por estar en estado de indigencia. Que la casa que se encuentra en Ciudad Bolívar genera un arriendo de \$200.000 que se destina al inmueble y en ninguna entrevista se afirmó que sirviera para el sostenimiento del grupo familiar; resaltando que su hijo GABRIEL JAIME contribuía en los gastos de la casa con ayuda económica y alimentación y que después de su muerte quedó afectada con inminencia y de manera grave su subsistencia.

Debe entonces la Sala, efectuar la valoración del acervo probatorio, a la luz de lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, para efectos de determinar si la parte demandante cumplió con la carga probatoria referida al requisito de dependencia económica exigido en el artículo 13 de la ley 797 de 2003.

Se probó con prueba **documental** lo siguiente: **i) GABRIEL JAIME RICO URIBE** falleció el **9 de octubre de 2012** a los 22 años de edad⁹ como consecuencia de heridas por proyectil de arma de fuego. En ese momento se encontraba cotizando a **COLFONDOS** entidad en la que se afilió desde el **20 de mayo de 2008**¹⁰ y a través del empleador **ENERGIZANDO** donde devengaba un salario de \$800.000 mensuales para el momento del fallecimiento¹¹. **ii) GABRIEL JAIME** era hijo de LUZ DARY y GABRIEL ALONSO quienes contrajeron matrimonio el 12 de septiembre de 1987¹². Para el momento de la muerte de su hijo, el padre tenía **51 años** al haber nacido el **4 de septiembre de 1961** y la madre **46 años** ¹³. **iii)** El padre laboraba en la **ASOCIACIÓN RADIAL COLOMBIANA** desde el **12 junio de 2007** y con un salario mensual para el **2012** de **\$566.700**. Tenía afiliada como beneficiaria en Salud a su cónyuge LUZ DARY y desde 2007 reportó como beneficiarios en COMFENALCO a su cónyuge y a los hijos menores DANIEL y GABRIEL JAIME¹⁴. **iv)** LUZ DARY y GABRIEL ALONSO tuvieron otros dos hijos: **JHENNY** mayor que el causante quien nació el 23 de abril de 1985 por lo que tenía 25 años al momento del fallecimiento de su hermano, y dos hijos: Nicole Dahiana y Michael Andrés, quienes tenían 6 y 5 años, respectivamente, para el momento de la muerte de su tío¹⁵. Y el hijo menor de los demandantes **DANIEL STIVEN** que nació el **16 de julio de 1993** por lo que tenía 19 años cuando Gabriel Jaime falleció. El **24 de mayo de 2012** suscribió Acta de Legalización de

⁹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – páginas 18 y 20 – Nació el 15 de octubre de 1989

¹⁰ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – páginas 34- 36

¹¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – páginas 79 y 36

¹² CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – páginas 28

¹³ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – páginas 27, 29 y 44

¹⁴ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – página 45, Archivo 04 página 115 y Archivo 06RespuestaOficio

¹⁵ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – páginas 22, 24 y 26

Sustitución Privación Libertad ante el Juez Primero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento. Con auto del **16 de octubre de 2015** el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas decidió no reponer el proferido el 7 de julio de 2015 con el que no se concedió libertad condicional¹⁶. **v)** Los padres solicitaron a COLFONDOS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prestación que fue denegada por **COLFONDOS** el **15 de marzo de 2013** argumentando que los solicitantes no acreditaban la calidad de beneficiarios porque no dependían económicamente del causante¹⁷. Se sustentó la decisión en informe de investigación realizado por **MAPFRE COLOMBIA DE VIDA SEGUROS S.A**¹⁸.

En el proceso declararon los **DEMANDANTES**, quienes **no efectuaron confesiones en contra** y otorgaron información importante en relación con la dinámica del grupo familiar, que se encuentra respaldada con los documentos aportados y con los testigos del proceso. Veamos:

LUZ DARY DE JESUS URIBE URIBE (min 06:29 – 29:51) informa estar casada con GABRIEL ALONSO desde el año 1987 con sociedad conyugal vigente y ser beneficiaria en salud de su cónyuge para la fecha en que fallece su hijo GABRIEL JAIME. Dice que el aporte que realizaba su hijo estaba destinado "a cubrir los gastos de él sino la alimentación de nosotros", explica que su hijo se ganaba alrededor de ochocientos mil pesos al mes en ese tiempo, "él daba cuatrocientos mil pesos o sea doscientos quincenal". Dice que su hija mayor JHENNY no vivía con ellos para la fecha de fallecimiento de GABRIEL JAIME pues vivía con sus dos niños y el esposo, se encontraba trabajando en período de prueba para la empresa ALLUS y no aportaba a la casa paterna. Explica que dentro del trámite de la reclamación pensional que adelantó ante COLFONDOS recibieron una visita de verificación enfatizando en que "nosotros respondimos con la verdad, lo que pasa es que en el momento el asesor nos decía, *pero vamos a colocar esto porque así les sale más fácil la pensión*, porque supuestamente él iba asesorarnos para que nos dieran la pensión". Dice que GABRIEL tenía 23 años cuando falleció y había comenzado a laborar desde que cumplió los 18 años. Que para el momento de su muerte los padres sólo vivían con él "porque mi hija ya tenía su hogar y mi otro hijo en ese momento estaba en detención, estaba detenido"; que GABRIEL en ese momento tenía unos créditos que estaba pagando: "un equipo de sonido que él había comprado y un computador" y "tenía una motico, una 100". Sobre las actividades extra laborales de GABRIEL JAIME dijo que eran "Estar en la casa y jugar play con un amiguito que tenía", y que antes de vincularse laboralmente en ENERGIZANDO tuvo trabajos informales en talleres de bicicletas y de motos, así como en

¹⁶ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – páginas 23, 80 a 83 y 84

¹⁷ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – páginas 37 a 42

¹⁸ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 04 – páginas 22-32 y 33 - 47

una fábrica de arepas. Explica que su esposo GABRIEL ALFONSO trabajaba para TODELAR en la emisora Claridad y con el salario cubría "parte de los gastos de la casa como el arriendo y parte de los servicios, porque entre GABRIEL JAIME y él compartían los gastos". Y que cuando su hijo murió tenían un inmueble en Ciudad Bolívar que compraron con unos ahorros de cuando fueron desplazados de Chigorodó (Antioquia) en el año 1995. En este inmueble vivieron siete años de 1995 al 2002 y para el momento del fallecimiento de su hijo estaba arrendado en doscientos mil pesos, suma que se destinaba a pagar la hipoteca; inmueble que luego se tuvo que vender para cubrir el valor de una indemnización que se impuso a su hijo menor DANIEL quien "tuvo un problema con un muchacho y le lesionó un ojo y la lesión fue permanente". Afirma que para el año 2012 vivían en un inmueble de la empresa donde trabajaba su esposo.

GABRIEL ALONSO RICO VASQUEZ (min 29:52 – 53:52) dice que lleva casado 35 años con LUZ DARY y para la fecha en que falleció su hijo estaba trabajando con TODELAR y tenía afiliada a su esposa a la EPS quien ha sido ama de casa y lo era para la fecha en que murió GABRIEL JAIME, de quién expresamente afirmó que "hacía ese aporte siempre desde consiguió su trabajito era con el fin de ayudarme a mí, ya que el sueldo mío por no tener estudios ni nada ... yo nunca tuve un trabajo donde se devengara un sueldo que diera para vivir dignamente, entonces él siempre se encargaba de lo que era la comida, aportar para la alimentación, y ya el resto lo íbamos solventando ahí a como nos fuera dando la vida y las cosas que se presentaran". Dice que para ese momento él se ganaba un mínimo y le daba era exclusivamente "para arriendo, servicios y cositas pa lo que alcanzara, pa lo que alcanzara ese dinero". Residían en una vivienda que era de su empleador, el convenio fue ganar un mínimo y por la casa tenía que aportar una especie de arriendo que era "más bien más bajito que lo normal y sí los servicios, lo que se consumiera" (...) eran trescientos mil pesos de arriendo y ya los servicios pues había variación entre 120, 130, 135 algo así". Precisa que él recibía su sueldo normal y hacía la cancelación del arriendo pactado con ellos. Para el año 2012 cuando fallece su hijo JHENNY estaba iniciando un periodo de prueba con la empresa que iba a trabajar para esos días, aún no había recibido su primer sueldito siquiera. Y respecto a las preguntas que fueron realizadas por el investigador en la visita expone: "Pues siempre se le respondió con la verdad, lo que pasa es que yo veo ahí algo dudoso, sospechoso, porque el señor siempre nos enrutó a que le permitiéramos, a que él colocara lo que quería colocar que eso no iba afectar en ningún momento una pensión de sobreviviente, que según él, ya nosotros teníamos ganada, ya era propia, de nosotros. Y entonces lo que él colocara en el papel que estaba llenando, el cual lo lleno fue él, no iba afectar este asunto, entonces siempre se le dijo la verdad porque quien va a tener desconfianza en un asunto así". Dijo que GABRIEL JAIME era temeroso a endeudarse porque él decía que "él lo que era el mercaito bregaba a no dejarlo colgado, que siempre su platica le diera para la alimentación y ya sus deudas y cosas eran muy pequeñas". Sobre el inmueble en Ciudad Bolívar explica que después del fallecimiento de su hijo tocó venderlo para salir de un

asunto en el que resultó involucrado su segundo hijo varón porque “resultó un muchacho con un ojo reventado entonces para yo salvarme y salvar el resto de mi familia y no dejarlos inseguros tocó echar mano de lo que fuera para poder darle a esa gente un dinero y evitar que hubieran represalias contra mi esposa, mi hija y mis nietos, entonces esa casa ya no existe”. Y en vida de GABRIEL JAIME “la casa daba la cuota para acabarle de pagar al banco, que fue conseguida con un préstamo de DAVIVIENDA, para eso se usaba para pagar la misma casa”. Sobre las actividades de su hijo por fuera del trabajo explicó: “El cuándo no, pues, cuando no estaba trabajando estaba en la casa, sí estaba en la casa, o sea jugando con sus compañeros que lo visitaran y ahí siempre. Él fue más bien casero, él no fue un muchacho de mucha murga ni eso, si no que del trabajo a la casa y de la casa al trabajo”

En el proceso declaró como testigo **JHENNY RICO URIBE** (min 55:14 y siguientes) hermana del causante. Cuenta que GABRIEL JAIME RICO falleció en octubre del 2012, para ese momento vivía con sus padres, “solamente ellos tres porque mi hermano menor para ese tiempo estaba detenido en la cárcel de menores” y ella “llevaba un mes trabajando, estaba en periodo de prueba en ese tiempo” en la empresa ALLUS que es un call center que ahora se llama CONECTA. La testigo vivía en Robledo La Campiña con sus dos hijos que tenían 5, 6 años y con su pareja. El padre trabajaba para TODELAR devengaba el salario mínimo. Para el 2012 sus padres vivían en la calle 65 C # 97 – 95 Robledo Villa Campiña, pagaban arriendo, estaba alrededor de 300.000 mil pesos, valor que pagaba el padre. GABRIEL JAIME estaba vinculado en la empresa ENERGIZANDO como ayudante de electricidad con un salario de 800.000 mil pesos, mientras que el del padre era de 500.000 mil pesos y la madre era ama de casa. Dice que GABRIEL JAIME era el que daba el dinero para hacer el mercado, daba 400.000 mil pesos para que sus papás hicieran esa compra y en algunas ocasiones cuando no le alcanzaba el dinero a su padre para cubrir los servicios él le ayudaba con un poco más de dinero. Su hermano no tenía pareja, nunca quiso irse a vivir solo y después de su muerte el hogar desmejoró totalmente, ella no tiene la posibilidad de ayudar económicamente porque tiene dos hijos y su hogar y con el salario que su papá se gana cubre lo básico de las necesidades que ellos tienen. Para la fecha en que falleció GABRIEL JAIME sus padres tenían una casa en Ciudad Bolívar, el alquiler estaba en 200.000 mil pesos con lo que se cubría la hipoteca que se estaba pagando. El inmueble se vendió en el 2018 y con ese dinero se hizo el pago de una indemnización que tenían que cubrir sus padres por un incidente que tuvo su hermano menor. Informa que los servicios públicos del hogar donde residían los pagaba su padre quién cubría el vestuario de los dos, y respecto al impacto económico de la muerte de su hermano afirma que en realidad le causa mucha impotencia porque es la hija única porque DANIEL fue asesinado hace tres años; no puede ayudar a sus padres quienes se han visto en la necesidad de recibir vestuario de personas que les regalen porque no tienen la capacidad para comprarlo. Sobre el

hermano menor DANIEL dice que él no aportaba porque vivía en la calle, no vivía donde los padres y no trabajaba. Y precisa que para el fallecimiento de GABRIEL JAIME ella vivía con sus dos hijos y su pareja, no tenía forma de ayudar a sus padres porque su esposo también ganaba el salario mínimo y ella llevaba un mes trabajando, tenían que pagar arriendo, servicios, alimentación y educación de los niños entonces no tenían la posibilidad de ayudarlos. Que para la fecha de fallecimiento de GABRIEL JAIME sus padres no eran autosuficientes porque siempre tuvieron la ayuda de su hermano y la necesitaban. Sobre la forma en que GABRIEL JAIME distribuía su salario, dice que él daba los 400.000 mil pesos para la alimentación, su transporte para ir a trabajar, en algunas ocasiones ayudaba con los servicios si a su papá no le alcanzaba y ya lo que le quedaba era para consumir alimentos por fuera o para tomarse algo. Él permanecía mucho tiempo en la casa y los amigos que lo visitaban era para jugar play. Sobre el trámite de la pensión y la visita realizada, cuenta que la llamaron "y le dijeron que era necesario que estuviera presente en el momento que llego el asesor hacer la entrevista y ahí si me gustaría aclararles algo que nos tiene muy molestos, porque en el momento que la persona nos estaba haciendo el proceso nos empezó a preguntar, cómo eran los ingresos, quiénes aportábamos a la casa y que si nosotros colocábamos cierta información eso les iba ayudar a mis papás para poder tener la pensión y en realidad ahí se colocó que yo aportaba para el inmueble, para la casa y no fue así. En desconocimiento y como era la primera vez que nos afrontábamos a una situación de esas nos dejamos asesorar del señor que fue a la casa y dimos la información que quedó registrada" (...) "Porque el asesor nos dijo que, si colocábamos ciertos ingresos y ciertos gastos, dependiendo de eso ellos podían tener el beneficio de la pensión. (...) En realidad, nosotros nos dejamos asesorar de la persona que fue hacer la entrevista porque nos dijo en varias ocasiones que si esa información se colocaba ellos podían tener ese beneficio, nosotros ignorantes en el tema dijimos que sí estábamos de acuerdo con lo que él decía, porque nosotros asumimos que esa persona tenía el conocimiento y sabía cómo es el proceso(..) Claro que sí, nosotros le informamos al asesor que mi papá se ganaba el salario mínimo, que como ya había informado en ese tiempo estaba en 500.000 mil pesos y el asesor nos dijo: *vea si colocamos esta cantidad eso les puede ayudar para tener el beneficio*; y nosotros dijimos está bien si eso nos va ayudar coloquemos esa información"

También declaró **SIMÓN ANGEL NARANJO** (min 1:26:11 – 1:33:40) vecino de la familia desde el año 2007 y tenía muy buena relación con GABRIEL JAIME. Dice que en el año 2012 cuando murió vivía sólo con sus padres porque JHENNY vivía con el esposo Andrés y con los niños. Don GABRIEL el padre, trabajaba en una empresa de TODELAR, LUZ DARY era ama de casa. Ellos vivían en casa arrendada, para ese tiempo pagaban 300.000 mil pesos que pagaba el padre. A la pregunta ¿En qué invertía GABRIEL JAIME lo que recibía de su salario? contestó: "No, pues yo siempre veía porque yo mantenía mucho con JAIME y él siempre decía que lo primordial para él era la alimentación para la casa, siempre estaba muy pendiente de más que todo del mercadito y esas cosas. ¿**Él mercaba?** Si, él le daba

la plata a su madre o muchas veces él iba con ella, porque como le digo nosotros manteníamos mucho juntos y yo frecuentaba mucho pues como ese hogar, pues en esos tiempos que él estaba en vida. Ya. **¿Sabes más o menos cuánto le daba a la mamá para mercar y cada cuánto?** Si muchas veces pues me tocó ver incluso que se quedaba hasta pues sin plata, porque él decía: lo principal es el mercado para mi casa y para mis padres. Él les daba aproximadamente siempre 400, 450. **¿Cada cuánto?** No, quincenal pues, mensual daba eso quincenal aproximadamente 200, a él le pagaban quincenal me acuerdo en ese tiempo. **¿Sabe si JHENNY les colaboraba a sus padres con los gastos del hogar?** No, yo me acuerdo que no les daba porque ella pues con sus dos hijos, ella vivía con ANDRES, pues otro amigo conocido. Si. Y yo recuerdo que a duras penas les daba para comer a ellos, pues no les daba para colaborarles y incluso que ella tampoco trabajaba en esos tiempos" (...) nosotros salimos a jugar futbol e incluso me mantenía yo mucho en la casa de ellos jugando play y eso, entonces tuvimos muy buena relación a partir de ese tiempo como hasta la fecha que él falleció. **¿Usted como amigo sabe por esa fecha del fallecimiento si él tenía una novia o alguien con quien tenía una relación pues formal?** No, la verdad, porque él, pues el sí tenía amigas lo normal pues de uno pues cuando está pelao, pero él decía que no, que porque las mujeres, pues usted sabe que hay que gastarles, invitarlas a salir y todo y él en ese sentido decía que no le daba que porque, él primero era pues el hogar y su mamá, ayudarle a su mamá (...) **En lo que usted conoció ya que ha manifestado que mantenía en el hogar de GABRIEL JAIME usted conoció si frente a su fallecimiento ese hogar con sus padres desmejoro económicamente.** Si claro totalmente, total desde que GABRIEL faltó empezaron ellos a padecer de muchas necesidades incluso la alimentación, el vestuario muchas cosas. **¿Usted por qué dice eso o cómo le consta?** Porque uno hay veces iba a saludarlos a ellos y uno veía pues que antes cuando estaba JAIME, uno llegaba y le ofrecían comidita y juguito y esas cosas, pero a partir de que faltó JAIME ya pues se veían las necesidades en el hogar, tanto en el vestuario como en la parte pues de alimentación". Agrega que incluso muchas veces su madre les ha regalado ropa por la misma situación que comenta. Dice que la pareja tenía una propiedad en Bolívar, varias veces escuchó que la tenían hipotecada. Que en la casa donde vivían GABRIEL ALONSO y LUZ DARY con el fallecido era el padre quien pagaba los servicios públicos y que para el momento de la muerte de GABRIEL JAIME el hermano menor –Daniel-, estaba en prisión. Que los padres no eran autosuficientes económicamente, ellos dependían mucho de él "porque en el tema de la alimentación por decir, GABRIEL ALONSO con lo que ganaba en ese tiempo a duras penas les daba para pagar arriendo y medio vestirse". Que con su salario GABRIEL JAIME les daba a sus padres 400.000 o 450.000 mensuales, y asumía el valor de la cuota de la moto, la gasolina, las cosas de su aseo personal y el vestuario. El testigo visitaba al causante en semana después del trabajo o los fines de semana "en esos tiempos la verdad éramos muy gomosos pa jugar play y uno no veía la hora de salir pa ahí mismo, como decimos pues los pelaos, pa uno parcharse a jugar play" y se le pregunta: **¿pero él nunca salía a la calle pues y se tomaba un tinto?** A no, si claro nosotros muchas veces pues hasta con otro amigo con PIPE y con ANDRES.... el pelao era pues hay veces muy cómo le digo, muy casero y muchas veces nosotros le decíamos JAIME vamos que nosotros te invitamos así sea home y sí era muy poco lo que él salía la verdad,

porque como le digo muchas veces uno le tenía que decir JAIME vamos hombre que así sea que nosotros te invitamos home". El testigo dice que sabe cuánto era el canon de arrendamiento que pagaban en la vivienda de GABRIEL JAIME porque muchas veces le tocaba "escuchar o ver cuando entregaban el dinero a un señor José que era como el encargado de recibir el dinero en esos tiempos"; no sabe si estaba vinculado con TODELAR. Y sobre el inmueble que tenía la familia de GABRIEL ALONSO en Ciudad Bolívar recuerda que ellos decían que estaban muy preocupados porque esa casa la iban a rematar, cree que la tenían arrendada y ello sólo daba para los mismos gastos del mantenimiento del inmueble.

Pues bien, a la luz de lo previsto en el **artículo 61** del Código Procesal del Trabajo, el conjunto del acervo probatorio orienta el convencimiento de la Sala, a las siguientes conclusiones:

Sea lo **primero** señalar, que los testigos fueron espontáneos al responder a las preguntas realizadas, en manera alguna se evidencia que hubiesen sido coaccionados a responder dentro de la diligencia, ni que tengan interés alguno en el resultado del proceso. Se advierte que ante todas las preguntas respondieron coherentemente, guardando fidelidad con lo preguntado, siendo responsivos al declarar sobre lo que les consta de manera personal y directa. COLFONDOS formuló tacha en contra del testimonio de JHENNY en razón de su vínculo de parentesco con la activa, pero la Sala no encuentra en su dicho, referencia alguna que lleve a concluir la falta de veracidad; versión que encuentra pleno respaldo en la prueba documental y en las declaraciones del testigo **SIMÓN ANGEL NARANJO**.

En segundo lugar, porque la versión de los demandantes y los testigos del proceso en relación con la importancia del aporte del causante se corrobora con la prueba documental: Así se desprende del hecho de que el joven GABRIEL JAIME hubiese comenzado a laborar desde que era menor de edad en actividades informales para luego vincularse laboralmente devengando un ingreso fijo mensual que le permitió entregar una suma quincenal a sus progenitores, que al sumarla con lo que aportaba el padre se completaba de este modo el ingreso para atender las necesidades básicas del hogar, y mejorar la calidad de vida de los tres.

En Tercer lugar, en el proceso se acreditó que el padre percibía un salario mínimo legal mensual vigente fruto de su trabajo con la ASOCIACIÓN RADIAL COLOMBIANA y había sido el protagonista en el sostenimiento del hogar hasta que su hijo tuvo que empezar a trabajar para poder contribuir a la subsistencia mínima de la familia; siendo ellos dos los responsables de los ingresos del hogar porque la madre siempre fue ama de casa y

ninguno de los otros dos hermanos aportaba. Así, a la luz de lo previsto en el **artículo 13 literal d) de la Ley 797 de 2003, la sentencia C 111 de 2006 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia (SL 2605 – 2019, SL 3772 -2019, SL 3286 – 2019)**, en este caso salta a la vista la imposibilidad de los progenitores de mantener ellos solos el mínimo existencial que les permitiera obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna; requiriendo sin duda el invaluable aporte que brindaba el causante.

Cuarto. Para afirmar que los actores tenían independencia económica al momento del fallecimiento de su hijo, los recursos que tenían debían ser suficientes para acceder a los medios materiales que garantizaran la subsistencia y la vida digna, lo que no se configura por el simple hecho de que solo uno de ellos (el padre) percibiera un ingreso de salario mínimo(\$566.700) , incluso inferior al que devengaba su hijo(\$800.000); o por el hecho de que fuesen propietarios de un bien inmueble en el Municipio de Ciudad Bolívar cuyo canon de arrendamiento se invertía en el pago de la cuota del crédito hipotecario o el mantenimiento.

Quinto. En criterio de la Sala, es claro que en este proceso no se acredita una dependencia económica total y absoluta respecto del hijo. Pero lo cierto del caso es, que desde el momento en que el causante comenzó a trabajar, invertía sus recursos en sus progenitores, su aporte equivalía a una suma cercana al salario mínimo legal (*En el 2012 era de \$566.700 y contribuía con \$400.000 mensuales*); que era para atender rubros absolutamente indispensables para la manutención de los padres. Y asumía sus propios gastos personales incluyendo transporte y vestuario, liberando a sus padres de tales erogaciones: Todo ello permitió que los actores tuvieran un nivel de vida diferente, constituyendo en criterio de la Sala, la subordinación económica que exige nuestro ordenamiento jurídico para acceder a la prestación.

Finalmente, debe la Sala destacar que si bien se allegó al plenario la investigación realizada por la compañía aseguradora a través de la firma KRONOS INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA, se han acreditado en el proceso las múltiples inconsistencias que reposan en ella, referidas a las fuentes de ingreso y los rubros en que se distribuían los gastos del causante y sus padres; al monto de los ingresos del causante y el padre; a las personas que vivían en el hogar para el momento de la muerte de GABRIEL JAIME y respecto a quiénes eran los que contribuían con el sostenimiento del hogar.

La lectura que le da la Sala al acervo probatorio del proceso, le lleva a concluir, contrario al análisis efectuado por la entidad y los recurrentes, que estamos frente a un caso de un joven que comenzó a trabajar desde que era menor de edad y durante más de 5 años por la estricta necesidad de contribuir al hogar. Analizarlo de otro modo, es

desconocer el gran esfuerzo de GABRIEL JAIME RICO URIBE, quién durante todos esos años generó ingresos contribuyendo con un aporte necesario y ejemplar para el sostenimiento de sus padres, que al fallecer los deja sumidos en una evidente desprotección económica.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que llevará a la Sala a CONFIRMAR la providencia que se revisa por haberse acreditado de manera fehaciente que el aporte del hijo era determinante para la congrua subsistencia de los padres, y les asiste el derecho a continuar percibiendo un ingreso que les permita vivir una vida digna conservando de algún modo las condiciones básicas ofrecidas por el extinto afiliado.

PRESCRIPCION – RETROACTIVO

El Juez no encontró acreditada la prescripción de mesada alguna argumentando que la reclamación se efectuó el **11 de diciembre del 2012**, fue resuelta el **15 de marzo del 2013** y se presentó la demanda el **27 de enero del 2016**. El apoderado de COLFONDOS aduce que ha debido prosperar la excepción propuesta porque los demandantes radicaron su reclamación pensional en el año 2012 y la demanda fue presentada mucho más de tres años después.

Pues bien, efectuando el análisis a la luz de lo previsto en el **artículo 151 del Código Procesal del Trabajo**, se advierte que en efecto sí operó la prescripción de las mesadas causadas antes del **27 de enero de 2013**, porque el derecho pensional se causó el **9 de octubre de 2012**, los padres reclamaron en diciembre de 2012 y la demanda se instauró el **27 de enero del 2016**¹⁹. Debe destacarse que en este caso no se acredita la interrupción de la prescripción consagrada en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo durante el tiempo que duró el trámite de investigación (de diciembre de 2012 hasta el 15 de marzo de 2013 en que se emitió la respuesta); porque la demandada no es una entidad de naturaleza pública respecto de la cual se encuentre regulado el agotamiento de la reclamación administrativa previsto en tal disposición adjetiva. El retroactivo se calcula con 13 mesadas al año, porque la muerte acaeció con posterioridad al 31 de julio de 2011 en los términos del AL 1 de 2005.

RETROACTIVO PARA EL PADRE: 27 de enero de 2013 a febrero de 2023: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA OCHO PESOS (\$50.772.738).

¹⁹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – Archivo 01 – página 17

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2013	1,94%	12,13	\$ 294.750	\$ 3.575.318
2014	3,66%	13	\$ 308.000	\$ 4.004.000
2015	6,77%	13	\$ 322.175	\$ 4.188.275
2016	5,75%	13	\$ 344.727	\$ 4.481.451
2017	4,09%	13	\$ 368.858	\$ 4.795.154
2018	3,18%	13	\$ 390.621	\$ 5.078.073
2019	3,80%	13	\$ 414.058	\$ 5.382.754
2020	1,61%	13	\$ 438.901	\$ 5.705.713
2021	5,62%	13	\$ 454.000	\$ 5.902.000
2022	13,12%	13	\$ 500.000	\$ 6.500.000
2023		2	\$ 580.000	\$ 1.160.000
TOTAL				\$ 50.772.738

RETROACTIVO PARA LA MADRE: 27 de enero de 2013 a febrero de 2023: CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA OCHO PESOS (\$50.772.738).

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2013	1,94%	12,13	\$ 294.750	\$ 3.575.318
2014	3,66%	13	\$ 308.000	\$ 4.004.000
2015	6,77%	13	\$ 322.175	\$ 4.188.275
2016	5,75%	13	\$ 344.727	\$ 4.481.451
2017	4,09%	13	\$ 368.858	\$ 4.795.154
2018	3,18%	13	\$ 390.621	\$ 5.078.073
2019	3,80%	13	\$ 414.058	\$ 5.382.754
2020	1,61%	13	\$ 438.901	\$ 5.705.713
2021	5,62%	13	\$ 454.000	\$ 5.902.000
2022	13,12%	13	\$ 500.000	\$ 6.500.000
2023		2	\$ 580.000	\$ 1.160.000
TOTAL				\$ 50.772.738

Se ordenará a COLFONDOS seguir pagando a favor de los demandantes a partir del **01 de marzo de 2022** la mesada pensional por valor de **\$ 1.160.000** con **13 mesadas** anuales, distribuida en un 50% para cada uno, en los términos ordenados en la sentencia. Y tal como se definió en la providencia que se revisa, cumple acotar que de este retroactivo pensional la demandada deberá hacer la deducción de los aportes al sistema de seguridad social en salud, los cuales operan por ministerio de la ley conforme lo previsto en el inciso 3 del artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y por tal razón, no es necesario que medie una autorización judicial para el efecto (**SL4698-2020**).

6. INTERESES MORATORIOS

Conforme lo definido en la sentencia **C-601 de 2000** y en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (**SL1681-2020 y SL 3130 – 2020**), la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es simplemente la de resarcir los perjuicios ocasionados por la cancelación tardía de las mesadas pensionales y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones.

Así, al ser su naturaleza **simplemente resarcitoria** y no sancionatoria²⁰ no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la *mora* en el pago efectivo de la obligación, sin que sea necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas.

Pues bien, en criterio de la Sala en este caso no se presentan los presupuestos para exonerar a COLFONDOS de la imposición de esta **CONDENA**, pues lo que se observa en últimas es una tardanza injustificada en el reconocimiento de la prestación, por lo que se impone su reconocimiento en los términos ordenados en la sentencia que se revisa, en el que para definir la fecha de causación se tuvo presente el plazo legal de dos meses para el reconocimiento de esta prestación.

No obstante, se efectuará la modificación en relación con la fecha a partir de la cual se impone la condena, porque se declara **la prescripción de los derechos causados** con anterioridad al **27 de enero de 2013** de acuerdo con el análisis efectuado en el acápite precedente

7. SOBRE EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En la sentencia se invocaron los artículos 67 y 70 de la Ley 100 para condenar a MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. a reconocer la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión, señalando que a pesar

²⁰ CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016, entre muchas otras

que en la parte motiva se explicó cuál era la condena que procedía contra MAPFRE conforme no existe similitud con que finalmente se impuso en la parte resolutive en el numeral segundo.

La Sala confirmará la decisión que se revisa, por encontrarla ajustada a derecho a partir de las siguientes premisas: **i)** Cuando se trata de la muerte de una persona afiliada al RAI el legislador previó que este riesgo no siempre podría financiarse con el capital ahorrado precisamente porque al ser una prestación típica de un aseguramiento previsional, el número de semanas mínimo que permite su causación imposibilitaría, por principio o regla general, respaldar económicamente esta pensión que bien puede ser vitalicia. De esta manera, el legislador estipuló que, ante el déficit del capital, los fondos de pensiones debían contratar un seguro previsional para que la aseguradora aporte la suma adicional faltante para cubrir el riesgo (**arts. 70, 77 y 108 de la Ley 100 de 1993**). **ii)** Así, se tiene entonces que la obligación del seguro previsional fue reglamentada en el **Decreto 832 de 1996** que en su **artículo 8** estipuló que las entidades administradoras de pensiones deben contratarlos con el objeto de garantizar las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, en los términos de los artículos **40 y 48** de la **Ley 100 de 1993**. **iii)** De tal suerte, la aseguradora tiene que aportar la mencionada suma adicional necesaria para financiar la pensión, en la medida que se demuestre **como en este caso concreto**, la existencia del contrato respectivo²¹, su término de vigencia y que el siniestro que ampara se haya presentado durante el periodo de cubrimiento de la correspondiente póliza conforme lo establece el **artículo 11** del citado **Decreto 832 de 1996**. **iv)** Finalmente, debe resaltarse que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral la cobertura de los seguros previsionales en el sistema de seguridad social *«es automática, pues si se condena a la AFP al pago de la prestación periódica, a la Aseguradora, por ministerio de la Ley, se le extienden sus efectos en calidad de garante y, por tanto, tendrá la obligación de cubrir la suma adicional»* (**CSJ SL7895-2015**), lo que significa que ni siquiera es necesario llamarla al juicio para que la AFP pueda perseguir la efectividad de la póliza (**SL 369 -2022**). **v)** Siendo así las cosas, la responsabilidad de la llamada en garantía MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. se contrae a la cancelación de la suma adicional de la prestación pensional de supervivencia reconocida a los demandantes LUZ DARY DE JESÚS URIBE Y GABRIEL ALONSO RICO VÁSQUEZ en virtud de lo suscrito a través del Seguro Previsional en el que no se pactó en manera alguna que la aseguradora cubriría los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 ni la condena en costas que se profiere en contra de COLFONDOS S.A.

²¹ CARPETA PRIMERA INSTANCIA – archivo 03- páginas 10 a 20

8. COSTAS

En primera instancia se **condenó en costas a COLFONDOS**, decisión cuestionada por su apoderada y que será confirmada porque tal como se ha analizado a lo largo de esta providencia, es claro que resultó vencida en este proceso al encontrarse acreditada la calidad de beneficiarios de los señores LUZ DARY DE JESÚS URIBE Y GABRIEL ALONSO RICO VÁSQUEZ; obligación que se encuentra a su cargo al margen de que hubiese sido MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. quien a través de KRONOS INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA hubiese efectuado la investigación tendiente a verificar el cumplimiento de las exigencias consagradas en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; y que tenga a su cargo la cancelación de la suma adicional de la prestación pensional de supervivencia reconocida a la activa en virtud de lo suscrito a través del Seguro Previsional.

Pero sí le asiste razón a la recurrente en el sentido de que MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. ha debido ser condenada en costas en primera instancia y favor de **COLFONDOS S.A.** porque es claro que resultó vencida en relación con las pretensiones del llamamiento en garantía sin que hubiesen prosperado las excepciones propuestas. En este aspecto se **adicionará** la sentencia.

Y en relación con la segunda instancia, al no prosperar el recurso de apelación de MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. en contra de la sentencia, se causan costas a su cargo y a favor de los demandantes. Agencias en derecho: 3 smlmv en 2023. No se causan a cargo de COLFONDOS porque el recurso prospera parcialmente.

9. LA DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín, pero con las siguientes **modificaciones:**

- El numeral **PRIMERO** se **MODIFICA** porque se **CONDENA** a **COLFONDOS S.A.** al reconocimiento de la **PENSION DE SOBREVIVIENTES** a favor de LUZ DARY DE JESÚS URIBE URIBE Y GABRIEL ALONSO RICO VÁSQUEZ a partir del día **27 de enero de 2013**, porque se declara la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad.

El valor del retroactivo pensional liquidado desde el **27 de enero de 2013** a **febrero de 2023** asciende a la suma de **CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA OCHO PESOS (\$50.772.738) para cada uno de los demandantes.**

Efectuará el descuento en salud correspondiente, conforme lo definido en la parte motiva.

COLFONDOS S.A. seguirá pagando a favor de cada uno de los demandantes a partir del **01 de marzo de 2023** la mesada pensional equivalente al **50%** de **\$ 1.160.000** sin perjuicio del acrecimiento al que hubiere lugar, y con **13 mesadas** anuales en los términos ordenados en la sentencia.

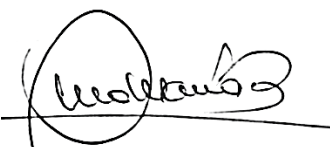
Y se **CONDENA** a **COLFONDOS S.A.** a pagar sobre el retroactivo pensional los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del **27 de enero de 2013** porque se declara la prescripción de los derechos causados con anterioridad; y hasta la fecha en que se haga el pago del retroactivo

- El numeral **TERCERO se adiciona**, porque se CONDENA a MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. a costas en primera instancia a favor de **COLFONDOS S.A.**

SEGUNDO: CONDENAR en COSTAS de la segunda instancia a MAPFRE DE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. a favor de los demandantes. Agencias en derecho: 3 smlmv en 2023.

Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quienes en ella intervinieron. Vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al Despacho de origen.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



RADICADO: 050013105 009 2016 00152 01

SENTENCIA del //03/02/2023

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia, **para ello debe tener una cuenta de Microsoft**. Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EmR1-fBIRZpGqdKFdqkrBpEBalfqcV7iKE2pUmkWA36w3A?e=QJ2jZu